

AMAZONAS: DOS PAISES, UNA SOLA REALIDAD

A finales de marzo tuve oportunidad de visitar Boa Vista, capital del Estado de Roraima, en la Amazonia brasileña, y constaté —una vez más— cómo las fronteras son tan sólo líneas artificiales que dividen una misma realidad en jurisdicciones diferentes.

Lo primero que salta a la vista al llegar a Boa Vista es la exaltación de la figura del garimpeiro, como trabajador pionero, ser sacrificado, generador de riqueza. Pero ¿riqueza para quién?, ¿riqueza a costa de qué?

El ambiente favorable a la labor del garimpeiro se impone en diferentes expresiones de la vida de Boa Vista: casas de cambio que exhiben sin pudor algunas fotografías de la selva amazónica devastada por la acción depredadora del garimpagem; una estatua impresionante de un garimpeiro con su batea, que corona la plaza principal del centro cívico de Boa Vista, rodeada por las sedes de los tres poderes públicos; cuerdas enteras repletas de tiendas dedicadas al comercio del oro, en un estado en el que la actividad de extracción está prácticamente prohibida en territorios indígenas que ocupan gran parte de la superficie de Roraima.

Ligia Bolívar O.

Al observar el fenómeno del garimpagem, resulta fácil encontrar similitudes entre éste y el del narcotráfico: en ambos casos estamos frente a una actividad ilegal, de carácter internacional, centrada en una mercancía de alto costo, protegida por sectores políticos y económicos a cambio de cuotas de beneficio personal y ejecutada por seres que alguna vez fueron personas y que han llegado a los niveles más bajos de degradación: analfabetas miserables dispuestos a matar o morir por proteger su mercancía. ¿Quién, si no un grupo de trabajadores del garimpo, podría bautizar con el nombre de «Saddam Hussein» a la pista que sirviera de base de operaciones a los que en junio de 1993 asesinaron a un grupo de 16 miembros de la etnia yanomami en territorio venezolano? Así es el garimpo. Protegido, miserable, guerrillero.

EL PAPEL DE LA IGLESIA EN RORAIMA

En este ambiente donde el oro ha reemplazado a todos los valores, la Iglesia se erige como una de las pocas instituciones que defiende a los que llevan la peor parte en este «Nuevo Dorado», los pueblos indios de la Amazonia. Y por eso es atacada y perseguida. Por apostar a favor de los que sufren: yanomami, makuxí y tantas otras etnias que ven su territorio, su cultura y hasta su vida amenazados por hacendados y garimpeiros, con la complicidad de autoridades políticas y grupos económicos nacionales y extranjeros.

En este ambiente desarrolla su labor Dom Aldo Mongiano, Obispo de Roraima. Hace algunos meses la opción de Dom Aldo por los más humildes generó una fuerte corriente contraria de opinión pública. Durante varios días un locutor de una estación de radio local se dedicó a cuestionar su tarea, sugiriendo que alguien debía ponerle freno a este valiente defensor de la causa indígena. La respuesta al llamado fue contundente: un pistolero se comunicó telefónicamente con la estación de radio —en vivo— y dijo que estaba dispuesto a colocar la cabeza de Dom Aldo en la Plaza del Centro Cívico

—la misma de la estatua del Garimpeiro— si conseguía un hacendado que le pagara por el «trabajo». Esta oferta, al mejor estilo del temido sicariato, constituye una similitud más con el narcotráfico. En esta oportunidad fue fácil reaccionar: los abogados de la Iglesia introdujeron una denuncia contra el locutor por incitación al delito, y el programa fue clausurado. Pero las amenazas siguen.

Hace algunas semanas las autoridades decidieron, de manera unilateral, construir una represa hidroeléctrica en territorio makuxí. Los indios reaccionaron mediante la construcción de asentamientos en la zona en que se haría la represa, y el Gobernador envió un grupo de más de 60 policías para desalojarlos a la fuerza, destruyendo todo a su paso. Al día siguiente, unos diez kilómetros de alambre de púas amanecieron en el suelo, tres antenas de telecomunicaciones fueron derribadas y un par de puentes fueron destruidos. «Fuenteovejuna», sentencian los escasos simpatizantes de la causa indígena, mientras las autoridades y los medios locales señalan públicamente a Dom Aldo como responsable de los hechos, alegando que su labor misionera promueve la violencia.

Pero Dom Aldo se limita a sonreír cuando le preguntamos por las amenazas; en su sonrisa y en su labor y la del equipo que lo acompaña vemos un valiente testimonio de una Iglesia que no está dispuesta a sacrificar la dignidad de las personas a su cargo a cambio del vistobueno de los poderosos.

...Y EN LA AMAZONIA VENEZOLANA

Llegados a este punto, no podemos dejar de hacer comparaciones; la Iglesia en Amazonas, del lado venezolano, también es atacada por su labor defensora de la dignidad humana.

Cuando el antiguo Territorio Federal Amazonas pasó a ser Estado, se inició la discusión de la Constitución estatal, sin tomar en cuenta las opiniones, expectativas y necesidades de la población indígena, mayoritaria en la zona. La Iglesia, a través del Vicariato Apostólico de Puer-

to Ayacucho, realizó una importante labor de apoyo a las exigencias de participación formuladas por las comunidades indígenas, y se logró —tras una serie de movilizaciones— la incorporación de las principales aspiraciones de éstas en el texto de la Constitución local.

El éxito provocó no pocas reacciones adversas contra el equipo de Monseñor Ignacio Velasco, que se incrementaron cuando, meses más tarde, la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato brindó asistencia jurídica a las etnias de la región para solicitar ante la Corte Suprema de Justicia la nulidad de la recientemente aprobada Ley de Ordenamiento Político Territorial del Edo. Amazonas, la cual fue sancionada como un simple reparto de cuotas de poder entre los partidos políticos, sin tomar en cuenta la realidad indígena local.

Pero quizás las presiones más fuertes contra la Iglesia en nuestro Amazonas han sido las enfrentadas a raíz de los sucesos de Cararabo. La Oficina de Derechos Humanos denunció valientemente las torturas a que fueron sometidas las 23 personas detenidas y señaladas públicamente como contactos del Ejército Nacional de Liberación (ELN). Monseñor Velasco forma parte de la Comisión Nacional de Fronteras, y sus posiciones críticas a una mal entendida militarización de la región han sido interpretadas por las autoridades como una suerte de apoyo a la guerrilla colombiana, en momentos en que el fantasma del nacionalismo se apodera de la parte trasera de los carros.

SOBERANÍA EN ENTREDICHO

En Cararabo murieron 8 venezolanos, miembros de nuestras Fuerzas Armadas, en un cruel y sangriento ataque que no tiene justificación alguna. En Haximu murieron 16 venezolanos, miembros de la etnia yanomami, en una acción no menos cruel y despiadada.

Sin embargo, las reacciones oficiales no han sido del todo similares. Cararabo encendió la mecha de la xenofobia, expresada en la expulsión indiscriminada de ciudadanos colombianos (¿indocumenta-

dos?) y en declaraciones que tildan de traición a cualquier expresión que difiera de la oficial, a pesar de la contundencia de las evidencias de tortura. Desde la masacre de los yanomami de Haximu se ha producido la detención de cuatro garimpeiros, los cuales cuentan con un abogado designado por las autoridades brasileñas, que vela por sus derechos y presiona para que sean dejados en libertad, sin que el asunto sea interpretado como traición a la Patria por las mismas autoridades nacionales que señalan a todo el que levante la voz para denunciar las torturas sufridas por los 23 detenidos en torno a los sucesos de Cararabo.

El concepto de soberanía parece ser algo flexible y circunstancial. Tras la masacre de los yanomami en Haximu, las autoridades brasileñas entraron durante ocho días seguidos en territorio venezolano, recabando evidencias sobre lo sucedido; lejos de producir una nota de protesta, las autoridades nacionales firmaron un acuerdo en el que Venezuela renuncia a la investigación de los hechos, dejándola en manos de las autoridades brasileñas, concretamente, de un tribunal de Boa Vista, de esos que quedan justo frente a la estatua de homenaje al garimpeiro. Mientras los garimpeiros detenidos en Venezuela tienen abogado designado por las autoridades brasileñas, cabe preguntarse: ¿quién es el abogado destacado por la Cancillería venezolana para defender los intereses de los yanomami ante los tribunales de Brasil?

Muchos analistas oficiales e independientes han afirmado que los sucesos de Cararabo son el resultado de la falta de presencia de fuerzas colombianas en la frontera, lo cual permite a la guerrilla actuar con plena libertad en contra de nuestros puestos militares; por esta razón se exige a las Fuerzas Armadas colombianas una mayor presencia que ponga freno a estas incursiones ilegales y violatorias de nuestra soberanía. Se trata de un razonamiento lógico y plenamente aceptable. Sin embargo, cabe preguntarse por qué no se exige algo similar a las autoridades de Brasil.



En 1990 las autoridades brasileñas emprendieron la llamada operación «Selva Libre», con la cual se pretendía expulsar de la Amazonia brasileña a unos 10.000 garimpeiros. La operación fue bastante exitosa, y se logró la salida de unos 9.600 garimpeiros; se estima que aún persiste un pequeño foco de unos 400. Pero, como el garimpagem no es una actividad que se erradica de manera sencilla, es fácil suponer que los que antes buscaban oro en las fuentes de la cuenca amazónica, ahora lo hacen en la cuenca del Orinoco, sin que hasta el presente se haya producido ninguna exigencia ni medida por parte de las autoridades venezolanas, similares a las que se presentaron a Colombia después de lo de Cararabo, en nombre de esta flexible concepción de soberanía.

Nuestra soberanía se ve tan amenazada por la guerrilla colombiana, como por la actividad del garimpeiro brasileño. En ambos casos, gente como Dom Aldo y Mons. Velasco constituye un testimonio de la verdadera misión de una Iglesia que apostó desde hace tiempo en favor de quienes sufren, por encima de los intereses económicos o políticos; por encima de las falsas y patológicas expresiones de nacionalismo con que se pretende encubrir una realidad que reclama, de ambos lados de la Amazonia, una mayor atención a la población local por parte de las autoridades venezolanas, en favor de su dignidad. □

Ligia Bolívar es sociólogo, miembro activo de PROVEA (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos)